

**PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN**  
CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común Sala I

ACTUACIONES N°: 2743/14



H102215316624

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, diciembre de 2024, se reúnen en acuerdo los Sres. Vocales de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial, Dres. Laura A. David, Marcela Fabiana Ruiz y Álvaro Zamorano para conocer y decidir el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en los autos caratulados **"FRIAS CAROLINA DEL VALLE c/ GAMBINO JOSE RODOLFO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS"- Expte. N° 2743/14** acumulado a la causa caratulada: **"CASTILLO JOSE CARLOS Y OTRO VS GAMBINO JOSE RODOLFO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS" - EXPTE. N° 1132/15.**

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de la votación, el mismo dio el siguiente resultado: Dres. Álvaro Zamorano como preopinante, Laura A. David como segunda vocal y Marcela Fabiana Ruiz como tercera vocal. Los Sres. Vocales se plantean las siguientes cuestiones: ¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA EN RECURSO? ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?

**A la PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Vocal, Dr. ÁLVARO ZAMORANO, dijo:**

*I. El recurso*

Llega a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el letrado Ignacio Chasco Olazábal, en representación de la actora (Carolina del Valle Frías), contra la Sentencia Nro. 571 de fecha 24/08/2023 que, en lo pertinente, rechazó la demanda de daños y perjuicios deducida por Carolina del Valle Frías, en representación de su hijo menor Axel Isaías Castillo; por José Carlos Castillo y Beatriz del Valle Ruiz, padres de José Carlos Castillo (fallecido), en contra de José Rodolfo Gambino, Transporte Yerba Buena SRL y Protección Mutual Seguros del Transporte Público de Pasajeros, por el hecho acaecido en fecha 19/05/2014, con costas a cargo de los accionantes.

*II. La sentencia apelada*

En lo esencial, el fallo de instancia tuvo en consideración que en autos "Frías Carolina Del Valle c/ Gambino José Rodolfo y Otro s/ Daños y perjuicios" - Expte. N°: 2743/14, compareció Carolina del Valle Frías, en representación de su hijo Axel Isaías Castillo, y demandó por daños y perjuicios a Gambino José Rodolfo, a Transporte Yerba Buena SRL y a Protección Mutual Seguros, reclamando la suma \$2.018.000 por el accidente ocurrido el 19/05/2014, donde José Carlos Castillo, al conducir su motocicleta por el Pasaje Chazarreta a la altura del n° 1634, habría sido embestido violentamente por un colectivo que circulaba en sentido contrario, lo que resultó en su fallecimiento. Argumentó que el

En su presentación, el letrado Marcos José Terán, en representación de "Protección Mutua de Seguros del Transporte Público de Pasajeros", aceptó la cobertura de la póliza n° 143234 pero sostuvo que la versión de los hechos invocada por el actor es incorrecta. Alegó que el Sr. Gambino, conductor del colectivo, circulaba de manera atenta y a velocidad reglamentaria. En cambio, afirma que el motociclista venía en sentido contrario, a excesiva velocidad, lo que lo llevó a colisionar con una bicicleta antes de caer al suelo y golpearse la cabeza, fruto de lo cual fallece. Alude que la falta de uso del casco protector contribuyó a la gravedad de las lesiones, y el motociclista, al caer, habría sido posteriormente embestido por el colectivo. Argumenta que el motociclista probablemente ya estaba en una condición crítica antes del impacto con el colectivo, debido al golpe sufrido al caer.

El letrado Alejandro Torres se apersonó en representación de "Transporte Yerba Buena SRL"; impugnó la legitimación pasiva y respondió a la demanda interpuesta. Desestimó la versión del accidente presentada por el actor, sosteniendo que el colectivo de su mandante circulaba de Oeste a Este y se detuvo para recoger pasajeros. Que, al reiniciar la marcha, el conductor del colectivo, José Gambino, observa que una motocicleta venía a alta velocidad en sentido contrario, detrás de una bicicleta. Según su relato, el motociclista, tras intentar una maniobra imprudente, rozó la bicicleta, lo que provocó que perdiera el control, cayera y finalmente impactara contra el colectivo. Enfatiza que la conducta del motociclista fue negligente y temeraria, evidenciada por el hecho de que llevaba el casco de manera inadecuada, colocado en el codo en lugar de en la cabeza.

Mientras que, en los autos "Castillo José Carlos Vs Gambino José Rodolfo y otros s/ Daños y perjuicios" - Expte. N° 1132/15, se presentaron José Carlos Castillo y Beatriz del Valle Ruiz, en calidad de padres del joven José Carlos Castillo, fallecido en el accidente de tránsito del 19/05/2014, mediante representación letrada del Dr. Gerónimo Cano; promovieron demanda contra el conductor del colectivo y la empresa titular del mismo. Alegaron que su hijo circulaba en su motocicleta por el Pasaje Chazarreta, en dirección Este-Oeste, cuando se produjo el trágico incidente. Describieron que el colectivo circulaba en sentido contrario (Oeste-Este), ocupando el eje medio de la calzada. Que el Sr. Castillo, al intentar esquivarlo, fue impactado con el lateral izquierdo del colectivo, lo que resultó en su muerte instantánea. Sostuvieron que la causa primaria del accidente fue la posición incorrecta del colectivo en la calzada. Argumentaron que, de haber circulado correctamente, la colisión no se habría producido.

Por su parte, los letrados apoderados de "Transporte Yerba Buena SRL", José Rodolfo Gambino y "Protección Mutua de Seguros del Transporte Público de Pasajeros", contestaron demanda y brindaron una versión de los hechos en términos similares a los expuestos en el expediente acumulado. En esta contestación señalaron que el Sr. Gambino circulaba por el Dis-

en dirección Este - Oeste, rozó a una bicicleta que se trasladaba por delante suyo, cayó al pavimento golpeándose la cabeza y falleció fruto de ese golpe.

En lo concreto y conducente, el sentenciante ponderó que los actores acreditaron la existencia del daño (muerte de la víctima), pero respecto a la intervención de la cosa con que se produjo el daño, entendió que no surge prueba concreta de que la muerte del Sr. Castillo se haya concretado por la intervención del colectivo. Valoró la declaración testimonial de la Sra. Juárez, quien manifestó que el motociclista, al intentar sobrepasar su bicicleta, perdió el control y cayó, lo que provocó el impacto con el colectivo; sostuvo que, si bien el informe accidentológico obrante en la causa penal determinaba que la causa del accidente era la posición del colectivo en la calzada, se contradice con otras pruebas que muestran que el colectivo no invadió el carril de la motocicleta, en particular, con las grabaciones de seguridad (extracto), a partir de las cuales infirió que el colectivo circulaba correctamente y que el motociclista ya se estaba deslizando antes del impacto.

Consideró que la dinámica del accidente revela que la velocidad excesiva del motociclista y su maniobra imprudente fueron factores determinantes en la caída. Además, constató que la víctima no llevaba el casco correctamente colocado, lo que agravó las lesiones sufridas en el impacto. En definitiva, señaló que el accidente fue resultado de la conducta imprudente del Sr. Castillo con interferencia de un tercero (Sra. Juárez), lo que produjo que cayera al pavimento, deslizándose e impactando finalmente en el lateral izquierdo del colectivo que venía circulando de manera reglamentaria, por lo que entendió configurada la eximente de responsabilidad invocada (culpa de un tercero por la cual los accionados no deben responder); razones por las cuales desestimó la demanda.

### *III. Los agravios*

El primer agravio se centra en la afirmación del sentenciante que establece que no hay prueba concreta de que la muerte del Sr. Castillo se haya producido por la intervención del colectivo. Sostiene que esta declaración denota arbitrariedad y desconocimiento de las pruebas, lo que violaría los principios de sana crítica y los artículos procesales referidos. Alega que es un hecho indiscutible que tanto la motocicleta como el colectivo intervinieron en el accidente, siendo ambos vehículos factores determinantes del hecho.

El segundo agravio se dirige a cuestionar lo manifestado por el Aquo sobre la posición del colectivo y su relevancia en el accidente, destacando que ello se basa en la mera voluntad del juzgador, apartándose de las constancias de la causa, en especial, de la prueba pericial accidentológica practicada por el Perito Accidentológico Vial de la Policía de Tucumán. Argumenta que la sentencia es arbitraria pues se aparta del aludido dictamen sin ningún soporte científico ni otra contraprueba pericial, haciendo suyos los argumentos de la testera defensora que ni siquiera declararon que el colectivo

el colectivo circulaba irregularmente invadiendo el carril norte por donde transitaba el occiso y al advertir la caída de este último pretendió regresar al carril sur y allí fue cuando con la rueda y eje trasero habría aplastado a la víctima. Agrega que si hubiera circulado por el carril sur -como sostiene el experto- la colisión no se hubiera producido.

Como tercer agravio, impugna la afirmación del juez de grado que sostiene que el conductor de la motocicleta no llevaba el casco en la cabeza, sino en el brazo, sugiriendo que esto influyó en el desenlace del accidente. Argumenta que esta afirmación es subjetiva y carece de fundamento, ya que (según la prueba pericial y el informe médico) el colectivo prácticamente aplastó a la víctima con su rueda y eje trasero, de este modo, el uso del casco no habría cambiado el resultado fatal del incidente.

Como cuarto agravio, cuestiona la afirmación sentencial a cuyo tenor, el conductor de la motocicleta no circulaba con la debida diligencia y que, supuestamente, excedía la velocidad, lo que habría llevado a que rozara a la testigo Juárez en su bicicleta. Alega que esta apreciación es subjetiva y carece de fundamento probatorio. Señala que el supuesto exceso de velocidad se basa únicamente en lo que la testigo Juárez declaró, quien no tiene capacidad técnica para determinar la velocidad real de la motocicleta. Se destaca que el juez, al aceptar esta declaración sin un respaldo técnico, incurre en un error de valoración, dado que la testigo podría tener un interés en su versión de los hechos. Resalta que una única declaración no es suficiente para fundamentar una sentencia. Además, critica que el juez no haya considerado adecuadamente la opinión pericial, ya que cualquier desviación de esta debe estar respaldada por pruebas en contrario, lo que no ocurrió.

En quinto lugar, sostiene que la sentencia impugnada le causa agravio en cuanto expresa que el accidente se produjo exclusivamente por las maniobras riesgosas y extremas del conductor de la motocicleta, así como por la interferencia de un tercero, la Sra. Juárez, lo que habría llevado a la caída del motociclista y posterior impacto del colectivo. Este análisis, que busca eximir de responsabilidad a los demandados por la supuesta culpa de la víctima, carecería de sustento fáctico y probatorio. Observa una clara contradicción en la valoración de pruebas, puesto que el juez concluye que el colectivo circulaba de manera reglamentaria y sin obstruir el carril contrario, a pesar de que también estaba al límite de su carril, lo cual contradice su propia afirmación. Destaca que la sentencia no logra desvirtuar la responsabilidad objetiva que emana del 1113 del Código Civil. Alude que la falta de prueba pericial y testimonial por parte de los demandados, quienes desistieron de aportar elementos probatorios en su defensa, refuerza la presunción de responsabilidad que establece dicho artículo.

En sexto lugar, considera que la sentencia impugnada, como el anterior, que los demandados se libren totalmente de

carga era esencial para desvirtuar la presunción de responsabilidad del propietario de la cosa riesgosa, en este caso, el colectivo, tal como lo establece el artículo 1113 del C.C. Expresa que la propia actividad jurisdiccional del juez ha intentado suplir la negligencia probatoria de la demandada y la citada en garantía, lo que pone de manifiesto un evidente grado de subjetivismo y arbitrariedad en la decisión adoptada. Esta conclusión se basa, además, en una declaración testimonial brindada en sede policial por la señora Juárez, así como en un video que no ha sido peritado en el marco de estas actuaciones.

Por último, se agravia de que las costas fueran impuestas a su parte (cfr. arts. 60 y 61 del CPCCT), pues considera que tuvo razón suficiente para demandar.

#### *IV. La solución*

Confrontados los agravios vertidos con los fundamentos de la sentencia cuestionada, el derecho aplicable y las constancias de autos, anticipo que, en caso de ser compartido mi voto, el recurso no tendrá recepción, conforme a los fundamentos que seguidamente se exponen.

Vale señalar inicialmente que el presente se trata de un caso de responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa (cfr. art. 1113 del Código Civil vigente al momento del hecho), donde la actora le basta probar el contacto de su vehículo con el del demandado. La responsabilidad impuesta al dueño o guardián del vehículo sólo cede o se atenúa si se acredita la culpa de la víctima o de un tercero por quien aquél no debe responder, o caso fortuito (conf. CCCC, Sala 1, “Pérez Antonio Jesús Enrique c/ Garzón Cesar Francisco S/ Daños y perjuicios.” Fallo del 29/11/2018). Desde esta perspectiva, el fallo recurrido encuadró adecuadamente la cuestión litigiosa suscitada entre las partes.

Ello en tanto es pacíficamente admitido que para la configuración de la responsabilidad por daños originados en el riesgo o vicio de la cosa se requiere su intervención activa, daño resarcible y relación de causalidad entre el riesgo de la cosa y el daño (cfr. entre otros, Pizarro, Ramón D., en Bueres - Highton, Código Civil Comentado, com. art. 1113. Ed. Hammurabi, vol. 3A, pg. 544 y ss.). Señala este autor que la carga de la prueba de dichos elementos pesa sobre el actor que reclama el resarcimiento de los daños sufridos, pero una vez probada la intervención activa de la cosa y su conexión causal con el daño, es dable presumir -hasta que se pruebe lo contrario- que el detrimento se generó por su riesgo o vicio, de modo que incumbirá al dueño o guardián desvirtuar aquella presunción. A tal efecto, sólo será útil la acreditación de una causa ajena con aptitud para interrumpir total o parcialmente el nexo adecuado de causalidad (CCCC - Sala I, “Cerúsico, Raúl E. vs. Transportes Métola s/ daños y perjuicios”. Sent. Nro. 97 del 26/3/2013, autos, entre otras).

La verificación del nexo de causalidad

culpa de la víctima o de otra causa ajena con idoneidad para interrumpir total o parcialmente el nexo adecuado de causalidad, habrá de exonerar en la misma medida al sujeto indicado como responsable. (CCCC - Sala I, "Tartalo Natalia c/ Aparicio Claudio del Rosario y otro s/ Daños y perjuicios." Sent. Nro. 165 del 29/04/2016).

Dicho esto, advierto que el Sr. Juez de grado ha mensurado y ponderado adecuadamente los antecedentes de la causa para desestimar la presente acción habida cuenta que, conforme se desprende de las constancias de autos, a cuyo análisis -como se dijo- necesariamente debe circunscribirse la solución del caso, se ha demostrado que el accidente se produjo por culpa de la víctima; más concretamente, al considerar que el accidente se obedeció exclusivamente a la realización de maniobras riesgosas y extremas del conductor de la motocicleta con interferencia de un tercero (Sra. Juárez) lo que produjo que cayera al pavimento pesadamente, deslizándose e impactando posteriormente en el lateral izquierdo del colectivo que venía circulando de manera reglamentaria y sin obstruir el carril contrario, configurándose así la eximente de responsabilidad que viene dada por la culpa de la víctima respecto del cual los accionados no deben responder; criterio que comparto por lo que, atento a que la pieza recursiva carece de la contundencia necesaria para modificar la decisión de la instancia anterior, es que me pronunciaré por su confirmación.

En lo medular del recurso, el apelante se agravia de que el sentenciante se apartara de las constancias de la causa, en especial, de la prueba pericial accidentológica practicada por Juan José Cata, Perito Accidentologico Vial de la Policía de Tucumán. En lo pertinente, el informe aludido expresa que la causa primaria y efectiva de la colisión Colectivo-Motocicleta es la interposición de la parte de la carrocería del colectivo en el carril de circulación Este-Oeste (carril de circulación primario de la motocicleta); que la causa efectiva de la desestabilización y caída de la motocicleta antes del impacto con el colectivo no es factible establecer por falta de elemento fáctico para tal determinación; y por último que la factibilidad de evitar la colisión Colectivo-Motocicleta estaba dada por el posicionamiento espacial del colectivo en la calzada, es decir, si el colectivo circulaba por el carril reglamentario (carril Sur), la colisión no se habría producido.

Sin perjuicio de lo dictaminado por el perito accidentológico, a cuyo entender la causa eficiente del daño lo constituiría la interposición del colectivo con su carrocería izquierda en el carril de circulación de la motocicleta, ello se contrapone a otras piezas probatorias que surgen de la misma causa penal. En este sentido, y contrariamente a lo sostenido por la apelante, resulta decisivo a los efectos de dilucidar la mecánica del accidente, la declaración prestada por la Sra. Hilda Mirta Estela Juárez en el Acta de Procedimiento Policial (fs.1 de la causa penal). Allí se dejó constancia que "el Sargento Cabrera, en el lugar de los hechos, tomó la declaración testimonial de la Sra. Juárez, Hilda Mirta Estela,



que al doblar hacia el Oeste, unos metros mas adelante de la esquina fue colisionada por la parte de atrás, sin llegar a caer, por el conductor de la motocicleta Appia, el cual al perder el control del vehículo por su alta velocidad, cayo violentamente debajo del colectivo de la Línea 12 el cual venia en sentido contrario al nuestro a la altura de la rueda traseras, que únicamente escucho el ruido y vio unos pedazos del casco de este muchacho que llevaba en el brazo izquierdo....”.

Su declaración fue ampliada luego durante la instrucción penal, donde puso de manifiesto que “En el día de la fecha aproximadamente como a horas 07:00 salí de mi domicilio a trabajar en mi bicicleta como es normal, tomando la calle Lucas Córdoba con sentido de orientación de norte a sur, y al girar por Pje. Chazarreta hacia el cardinal oeste, cuando circulaba por el Pje. de mención por la mano derecha fue ahí que una motocicleta que circulaba en el mismo sentido que yo me pasó por el lado izquierdo a gran velocidad rozándome con la moto la parte trasera de mi bicicleta, sin provocar que pierda el control, pero sí provocándome una lesión en la mano izquierda a la altura de la muñeca (lesiones) perdiendo el control de la motocicleta a alta velocidad, cayendo su conductor debajo del colectivo de la línea 12, que circulaba en sentido contrario a nosotros, (de oeste a este), más precisamente a la altura de las ruedas traseras del conductor. Continuando con mi relato es que escuché un fuerte ruido y unos pedazos de un casco negro que este llevaba en el codo antes de caer, observando a posterior a este chico tirado en el piso boca arriba con sangre en su rostro y sin moverse tal.”

Ello demuestra con elocuencia que el perito ha prescindido de un elemento relevante para la dilucidación de la secuencia causal, esto es, el testimonio espontáneo prestado en sede penal por una testigo que tuvo protagonismo en el accidente, cuya presencia en el lugar del hecho fue verificada en el Croquis Demostrativo (fs.4) y el Relevamiento Planimétrico (fs.76). Este Tribunal ha destacado la significativa trascendencia de los hechos denunciados por los partícipes de un accidente de tránsito, “quienes de inmediato, impactados todavía por la entidad del evento y tal como lo presenciaron, dejan constancia bajo firma en el acta policial correspondiente de los puntos culminantes del suceso, sin que en ese momento intervengan la reflexión o el consejo interesado, que los lleve a modificar o silenciar hechos, procurando de ese modo evitar así la responsabilidad que les pudiera derivar de los mismos.” (cfr. mi voto en "González Agustín Manuel c/ Sosa Héctor Armando y otro s/ Daños y perjuicios." Sent. Nro. 624 del 28/12/2023). Pondero también que las declaraciones rendidas ante la autoridad policial -ratificadas reitero luego ante la instrucción penal- no fue desvirtuada por prueba en contrario, lo que constituía -a más de una carga legal- un imperativo en el propio interés de la parte actora.

Advierto asimismo que la hipótesis que sostiene el perito también se contrapone con el informe técnico de Capturas y Digitalización que realizó a fs. 127/144 de la causa penal la Unidad de Investigación Criminal y

del mismo pero sin invadir el contrario (fotograma 1, 2, y 3); que el colectivo además no se encontraba en forma oblicua al eje medio de la calzada; y por último que el motociclista ya venía deslizándose por el pavimento de la calzada, evidenciando que anteriormente ya se había producido la caída del Sr. Castillo. Asimismo, advierto que el Lic. Cata sostuvo que el conductor de la motocicleta fue a impactar con el lateral izquierdo del colectivo, pero lo cierto es que de la pericia fisiomecánica (n° 2053/134/2014) realizada a fs. 78 de la causa penal sobre el colectivo, se informa que “al momento de realizar la inspección al vehículo mencionado, el mismo a la vista directa no presenta daños”, lo que resta eficacia probatoria al dictamen del perito.

Es sabido que el dictamen pericial no es vinculante para el juez, es decir, que no se encuentra obligado y tiene libertad a la hora de valorarlo, pudiendo incluso prescindir de las conclusiones periciales, mediante decisión debidamente fundada, supuesto que aconteció en autos. En este sentido, cabe tener presente que “los informes periciales, cualquiera sea su objeto, no obligan ciegamente al Juez a concluir de igual manera, sino en la medida en que los mismos se vean corroborados por los demás elementos probatorios. (CNCiv., sala D, 30/3/79, LL, 1979-C-114).” (CCCC, Sala 3, Sent. Nro. 356 del 27/07/2016). En el caso particular de autos, el apartamiento a las conclusiones arribadas por el perito no se encuentra fundado en el subjetivismo ni constituye el fruto de la mera voluntad del juez, como sostiene el apelante; antes bien, considero que se encuentra debidamente apoyado -conforme surge de las consideraciones precedentes- en otras constancias de la causa penal (prueba trasladada), en especial, la declaración de la testigo presencial (y protagonista) del hecho, el informe de la Unidad de Investigación Criminal y Delitos Complejos de la Policía de Tucumán, a lo que se agrega el Informe Fisiomecánico aludido, sin agravio eficaz que condujera a verificar infracción alguna a las reglas de la sana crítica.

No escapa a mi consideración, el hecho de que al promover la presente acción, la actora manifestó que el colectivo fue quien embistió violentamente con la parte delantera izquierda a la motocicleta, y al presentar sus quejas en esta Alzada modifica su posición al afirmar que “el colectivo circulaba irregularmente invadiendo el carril norte por donde circulaba el occiso y al advertir la caída de este último pretendió regresar al carril sur y allí fue cuando literalmente con la rueda y eje trasero aplastó a la víctima”. Sin perjuicio de tal incongruencia fáctica, ninguna de las hipótesis que propicia la parte actora -como se vio- encuentra debido sustento en las constancias de autos. Si bien el sistema de responsabilidad objetiva establecido por el art.1113 del Código Civil releva al damnificado del peso de demostrar la culpa del dueño o guardián de la cosa que por su riesgo o vicio le ocasionó el perjuicio, sin embargo, ello en modo alguno lo exime de probar la existencia del supuesto fáctico sobre el que apoyó su reclamo. Al respecto, esta Sala, en distinta intervención pericial, ha sostenido que “Se trata de un



probar el presupuesto de hecho del dispositivo que invoque en sustento de su pretensión, defensa o excepción.” (cfr. Sentencia n.º 531 del 25/11/2015), diligencia probatoria que la apelante no observó en la especie (conf. acta de audiencia labrada en fecha 11/02/2021).

Sin que las quejas vertidas sobre la interpretación que realizó el sentenciante respecto de la falta de uso de casco sean conducentes para revertir lo considerado. El Aquo sostuvo -como argumento de segundo orden- que, si la víctima hubiese llevado el casco colocado en donde corresponde y no en brazo izquierdo, como lo hacía, tal vez hubiera tenido mayor dominio de la motocicleta y evitado así el resultado dañoso (muerte), temperamento que considero razonable a la luz de lo que indica la experiencia común (conf. art. 127 CPCCT) y sobre todo teniendo en cuenta que las circunstancias particulares en las cuales se produjo el siniestro (realización de maniobras riesgosas por parte del conductor de la motocicleta a los fines de emprender una maniobra de sobrepaso en un pasaje de doble mano) requería de mayor diligencia. A ello se adicionó que, si el casco estuviera colocado en su cabeza al momento del impacto con el pavimento y/o posterior carrocería del colectivo, podría haber sido otro el desenlace del accidente, criterio que comparto. Sin lugar a dudas, la falta de uso de este elemento de seguridad se erigió en un factor agravante y/o condicionante del lamentable desenlace fatal, máxime cuando en la autopsia de la víctima se concluye en forma determinante que su muerte se produjo por “traumatismo encéfalo craneano”.

En definitiva, los agravios traídos a consideración de esta Alzada no son eficaces ni demuestran argumentalmente el error de juicio ni arbitrariedad atribuido a la resolución apelada, tal que conlleve a revertir lo decidido en la instancia de grado en cuanto a la culpa de la víctima y su responsabilidad exclusiva en el siniestro que motivara el inicio de estas actuaciones.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar el pronunciamiento apelado en lo que respecta la mecánica del accidente y consiguiente eximición de responsabilidad de los demandados.

#### *V. Costas*

Si bien la actora resultó vencida, lo que en principio conllevaría a imponerle las costas procesales -conforme al principio general que rige en la materia-, no obstante, cabe en el caso efectuar la siguiente precisión. Loutayf Ranea explica, con cita jurisprudencial, que existen circunstancias en que se ha eximido de costas al actor, a pesar del rechazo de su demanda: 1) Si pudo creerse con legítimo derecho para litigar, tratándose de un caso de difícil interpretación; 2) ...3) ... (cfr. CNCiv. Sala C, 11/7/67, LL 128-32; CNCiv, Sala A, 3/0266, LL123-90. Loutayf Ranea Roberto, Condena en costas en el proceso civil, pág. 404/405).

En el supuesto de autos, luego del siniestro en

padres del fallecido, y fundados en los mismos hechos demandaron por daños y perjuicios a Gambino José Rodolfo, Transporte Yerba Buena SRL y Protección Mutual Seguro, cuya falta de responsabilidad en el evento dañoso recién pudo ser dilucidada durante el transcurso del proceso, lo que revela en la parte actora y pese a las omisiones probatorias señaladas, una razonable convicción para entablar un reclamo resarcitorio.

En el contexto señalado, considero razonable y equitativo que las costas procesales devengadas en ambas instancias sean distribuidas por el orden causado (conf. arts. 61 y 62 CPCCT).

Por las razones expresadas, a la primera cuestión me pronuncio por la afirmativa, a excepción de lo considerado en torno a las costas procesales.

**A la MISMA CUESTIÓN, la Sra. Vocal, Dra. LAURA A. DAVID, dijo:**

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el Sr. Vocal preopinante, me adhiero a los mismos, votando en igual sentido.

**A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Vocal, Dr. ÁLVARO ZAMORANO, dijo:**

En síntesis, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha 24/08/2023, únicamente en lo referido a las costas procesales, las que deben distribuirse en ambas instancias por el orden causado (arts. 61 y 62 CPCCT).

Así lo voto.

**A la MISMA CUESTIÓN, la Sra. Vocal, Dra. LAURA A. DAVID, dijo:**

Compartiendo la resolución propuesta, voto en igual sentido.

Con lo que se da por concluido este acuerdo.

*La presente sentencia es dictada por dos miembros del Tribunal, por existir coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (art. 23 bis, LOPJ, texto incorporado por ley N° 8481).*

**Y VISTOS:** Por los fundamentos del acuerdo precedente, se:

**RESUELVE:**

**I. HACER LUGAR PARCIALMENTE** al recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha 24/08/2023, únicamente en lo referido a las costas procesales, las que deben distribuirse en ambas instancias por el orden causado (arts. 61 y 62 CPCCT), conforme lo ponderado.

**II. COSTAS** como se consideren

**IV. EXPIDASE** la presente resolución con copia digital en el expediente conexo, caratulado "Castillo José Carlos y otro Vs Gambino José Rodolfo y otro s/Daños y perjuicios" - Expte. N° 1132/15.

**HÁGASE SABER**

**ÁLVARO ZAMORANO**

**LAURA A. DAVID**

Ante mí:

**FEDRA E. LAGO**

NRO.SENT: 781 - FECHA SENT: 17/12/2024

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**Certificado Digital:**

CN=DAVID Laura Alcira, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27128698499, Fecha:16/12/2024;CN=ZAMORANO Alvaro, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 23223361579, Fecha:16/12/2024;CN=LAGO Fedra Edith, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27206925375, Fecha:17/12/2024;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

La funcionaria que suscribe con firma digital CERTIFICA que las presentes actuaciones son copia fiel del documento original con firma de los Sres. Vocales, Dres. Álvaro Zamorano y Laura A. David, de fecha 17 de diciembre de 2024, lo que obra en el Sistema SAE del Poder Judicial de Tucumán, de lo que doy fe. En San Miguel de Tucumán, a los 20 días del mes de diciembre de 2024.